

PROPUESTAS DE CÁRITAS
ANTE LAS ELECCIONES GENERALES 2023



PROPUESTAS DE CÁRITAS ANTE LAS ELECCIONES GENERALES 2023

PRESENTACIÓN

En el centro de las políticas, las personas más vulnerables

Con motivo de las próximas elecciones generales, y tal y como ha venido haciendo en las últimas convocatorias electorales con un resultado muy positivo reflejado en la legislación aprobada durante la legislatura, Cáritas quiere contribuir a la construcción de una sociedad más justa y fraterna.

Situando en el centro de la agenda política la realidad de las personas más vulnerables, Cáritas presenta estas propuestas legislativas y de políticas públicas con el propósito de compartir su análisis y alternativas con los partidos políticos para su inclusión en los programas electorales en un primer momento y para que estas políticas sean desarrolladas durante la próxima legislatura. Apelamos al compromiso de los partidos políticos para que pongan en el centro de sus políticas a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Y lo hacemos desde la constatación de que, cuando se establecen prioridades políticas, y se desarrolla un proceso que involucra la sociedad y a quienes tienen la competencia de gobernar y legislar, finalmente se aprueban políticas que tienen como eje principal a las personas que más lo necesitan.

Dignidad, derechos humanos, bien común

Este documento parte de principios evangélicos fundamentales y de la Doctrina social de la Iglesia como son: la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes y que deben ser garantizados por los poderes públicos en todo momento y lugar y el bien común que debe orientar las políticas.

Bases estructurales que protejan frente a la coyuntura

Las sucesivas crisis, económicas, sociales, ambientales, la originada por la

pandemia, o la derivada de la guerra de Ucrania, señalan la necesidad de reformas estructurales, de garantizar los derechos, de asegurar aquello que cimiente nuestra sociedad para hacer frente a las diversas coyunturas, en las que, si no se establecen bases sólidas, quienes más sufren son las personas en situación de mayor vulnerabilidad cuando el horizonte al que aspiramos es que sean quienes estén más protegidas.¹

Propuestas basadas en la realidad social

Estas propuestas parten de la realidad social a través de dos vías. Por una parte, son fruto de la participación directa de las personas en situación de exclusión acompañadas por Cáritas que han señalado los derechos prioritarios para ellas. Por otra, recogen el análisis realizado por Cáritas a través de su observatorio de la realidad y de las constataciones de los informes de la Fundación FOESSA.

Derechos priorizados por las personas en situación de exclusión

De este modo, las propuestas se basan en las prioridades señaladas por cerca de 1.000 personas acompañadas por Cáritas que, a través de 95 grupos de reflexión distribuidos en todo el territorio, han identificado aquellos derechos que requieren ser garantizados para posibilitar su completa participación en la sociedad.

Dimensión universal

Cáritas tiene una dimensión universal, como expresión del llamamiento a ser una única familia humana y del compromiso con las Cáritas nacionales y las realidades de sus países. Por ello, en nuestras propuestas en cada convocatoria electoral, está presente una propuesta de ámbito internacional, potenciando el rol que debemos tener en la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos en todos los lugares del mundo.

¹ Instrumento de trabajo pastoral sobre la persona, familia y sociedad. *“La crisis (...) nos deja una profunda huella (...) que se concreta en un aumento de las desigualdades y de la exclusión social, que amenaza con profundizar y hacer crónica la fractura social en los sectores más vulnerables. Frente a esta situación, el esfuerzo de respuesta desde las políticas públicas ha sido mayor que en la crisis anterior, con un proceso de refuerzo y transformación de las políticas públicas en marcha, que, sin embargo, no siempre ha podido seguir el ritmo que las necesidades sociales requerían. En unos casos se han introducido medidas provisionales (en el caso de la salud, la vivienda o la protección social) que sería necesario mantener de manera estable para*



el futuro, con las lógicas modificaciones”.

Lograr un marco legislativo que garantice los Derechos Humanos

Estas propuestas pretenden contribuir a lograr un marco legislativo que garantice los Derechos Humanos para el conjunto de la sociedad, prestando especial atención a las personas que mayores dificultades tienen para acceder a ellos y ejercerlos, debido a realidades de pobreza y exclusión, al origen o el género que determinan una mayor vulnerabilidad o lugares en los que el acceso a los derechos requiere una acción decidida. En este sentido, en el desarrollo legislativo de cada propuesta debe tenerse en cuenta la especificidad del ámbito rural adoptando las medidas adecuadas a ese contexto.

La mejor política puesta al servicio del bien común

Siguiendo lo que señala el papa Francisco en la carta encíclica *Fratelli Tutti* «si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad» (n. 127) y para ello en nuestra sociedad, en nuestro mundo «hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común» (n. 154). A este horizonte quiere contribuir Cáritas a través de estas propuestas respondiendo así a su misión desde la caridad política.

1. Garantizar la efectividad del derecho internacional de los derechos humanos.

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos contiene el soporte que toda persona necesita para poder vivir con dignidad al poder acceder, disfrutar y tener garantizado un nivel de vida adecuado que le asegure salud y bienestar con:

- Alimentación adecuada y sostenible.
- Vivienda, energía, agua e internet.
- Vestido.
- Asistencia médica.
- Servicios sociales.
- Seguros en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez y otros en casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Siendo desarrollado su contenido mínimo, de obligado cumplimiento para los Estados, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por nuestro Parlamento en abril de 1973) así como en la Carta Social Europea Revisada (ratificada a su vez en junio de 2021).

La interpretación de los derechos contenidos en nuestra legislación de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos, es una obligación de resultado que vincula tanto al legislador como a los tribunales. Esta interpretación no comprende solo el texto de los tratados y protocolos, sino también las decisiones de los órganos de supervisión de aquellos.

Cáritas propone:

La modificación de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales y la creación del Comité de Seguimiento de las Resoluciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos, con los siguientes objetivos:

- El cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos.
 - Las obligaciones mínimas, de carácter inmediato. Entre las obligaciones inmediatas se incluyen la prohibición de discriminación y la protección de grupos vulnerables.
 - Las obligaciones progresivas, a cumplir en un plazo razonable de tiempo y con el máximo de recursos posibles.
- La adopción de leyes y políticas públicas que hagan efectivas las recomendaciones y los dictámenes de los órganos de tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Español.

2. Prevención de la exclusión residencial de personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Vivir en un hogar digno y adecuado es en la actualidad la mayor preocupación de las personas y familias en situación de exclusión, desigualdad y pobreza en nuestro Estado (Informe FOESSA 2022).

Prevenir su pérdida y el comenzar a formar parte de los millones de personas en situación de sinhogarismo que en la actualidad viven en calle, en viviendas de acogida, infravivienda o vivienda insegura; se torna un objetivo esencial y prioritario para el diseño y ejecución de políticas públicas basadas en el derecho humano a una vivienda adecuada.

Cáritas propone:

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su procedimiento de desalojo para el logro de una mayor protección de personas y hogares vulnerables y en aplicación de los Dictámenes y Recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas. Con los siguientes objetivos:

- Asegurar que las personas afectadas tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada sin que se produzca el desalojo de su hogar en tanto no se garanticen dichas circunstancias (cumplimiento Observación General nº 7 del PIDESC).
- Que se incorporen los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas.

3. Generar un Plan Integral de Cuidados que contemple a las personas destinatarias de los mismos, a quienes los proveen y garantice prestaciones que permitan la libertad de elección.

La aprobación por parte de la Comisión Europea de la Estrategia Europea de Cuidados y por parte del Gobierno de España del PERTE de economía social y de los cuidados, debe ser el primer paso de cara a elaborar un Plan Integral de Cuidados ambicioso y transversal que suponga un avance en la promoción de los derechos, a la vez que una transformación en el modelo de sociedad.

Cáritas propone:

El desarrollo de un Plan Integral de Cuidados que vehicule la generación de normativa destinada a apoyar en la prestación de cuidados en las diversas etapas de la vida, ya sea infancia, adolescencia y juventud, mayores, personas dependientes o con discapacidad; la conciliación laboral y familiar; y la especial atención para dotar de los apoyos necesarios a las personas en riesgo o en situación de pobreza. A su vez, se deben garantizar y fortalecer los derechos laborales de las personas proveedoras de cuidados.

Que este Plan se genere desde el diálogo y la participación, a través de medidas que favorezcan la conciliación familiar y personal de la persona trabajadora o en periodo de formación; prestaciones sociales que faciliten la libre decisión de la persona y del entorno familiar en la autonomía y participación de los distintos colectivos afectados; y de la transformación de modelos de prestación de servicios colectivos encaminados a promocionar los derechos de las personas, con un enfoque de igualdad en el que la corresponsabilidad dentro del núcleo familiar sea primordial.

4. Garantizar el Derecho a una buena administración, reconociendo el derecho de las personas administradas a elegir el modo de relacionarse con ella, también a través de medios electrónicos, simplificando los trámites y agilizando los procedimientos.

El derecho a la Buena Administración recogido en los artículos 103 y 106 de la Constitución Española y en el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales colocan a las personas administradas y sus derechos en el centro en lo que respecta a la actividad de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo.

Esto implica que las Administraciones Públicas, en todos los niveles (local, autonómico y estatal), tienen el deber de garantizar el derecho de todas las personas administradas a elegir si se comunican con ellas a través de medios electrónicos o no para el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

Cáritas propone:

La creación de suficientes puntos de acceso públicos dotados de personal de apoyo y con presencia en todo el territorio, incluidas las zonas rurales, para garantizar que aquellas personas que así lo deseen puedan realizar y ser acompañadas de forma presencial en los trámites que les compete y sobre los que no pese una reserva de ley.

- Garantizar que esa relación, sea presencial o electrónica se realice en condiciones de igualdad, participación y transparencia, proveyendo además los recursos materiales y humanos necesarios para ello.
- Que la tramitación electrónica cuando se proponga de forma reglamentaria reconozca exenta a la población vulnerable por razón de su capacidad económica, técnica u otros motivos que acrediten que no tienen acceso ni disponibilidad a los medios electrónicos necesarios.

5. Desarrollar políticas públicas de empleo resilientes e inclusivas que garanticen los derechos de las personas trabajadoras a la vez que se adaptan a un mercado de trabajo dinámico.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia compromete a nuestro Estado ante la Unión Europea a modificar y adaptar las políticas públicas de empleo, fijando como reto y objetivo la modernización del sistema de empleo.

Por otra parte, en materia de derechos laborales y siendo objeto de reivindicación histórica la aprobación del Real Decreto Ley 16/2022 ha supuesto un avance en la equiparación de derechos entre las trabajadoras del hogar y el resto de personas que prestan servicios englobados dentro del régimen general. Sin embargo, quedan aspectos sin resolver, que mantienen algunas diferencias provocando que no se haya llegado a producir una igualdad real y completa.

Cáritas propone:

1. Que las políticas de empleo atajen las deficiencias del mercado de trabajo y las adapte a las nuevas realidades sociales, poniendo el foco en los colectivos de personas con un acceso más complicado al empleo decente. Es necesaria una planificación y coordinación de políticas de empleo que, entre otras, garanticen:

- Una empleabilidad adecuada que contemple la situación personal y familiar de la persona trabajadora a efectos de intermediación y colocación, facilitando la conciliación.
- Un acceso completo y adecuado a la cartera de servicios sin que se produzca una expulsión de las personas con carencia de medios y/o conocimientos digitales.
- Programas formativos que estén acompañados de acciones socioeducativas, cuyos destinatarios sean las personas integrantes de colectivos prioritarios.
- Medidas destinadas a desarrollar mercados de trabajo en las poblaciones de las zonas rurales, escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, evitando la deslocalización de las personas trabajadoras.
- El diálogo con las entidades del tercer sector especializadas en la intervención social con colectivos vulnerados de atención prioritaria, garantizando el reconocimiento como agentes claves de las políticas de empleo.

2. Realizar los cambios legislativos necesarios para que las trabajadoras del hogar alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social.

- Que se establezcan las medidas legislativas oportunas que garanticen unas condiciones de trabajo plenamente decentes que contemple las características propias y diferenciadoras entre las trabajadoras domésticas y las trabajadoras de los cuidados garantizando sus derechos. De igual manera, la equiparación plena con el resto de personas trabajadoras respecto a la cobertura por incapacidad permanente o por jubilación con la integración de periodos cotizados, también debe producirse.
- El mantenimiento de las bonificaciones para las familias empleadoras.

6. La política migratoria y las normativas de extranjería deben promover vías que contemplen oportunidades, más allá del mercado laboral.

Cáritas acompaña en origen, tránsito y destino a las personas forzadas a desplazarse. Conoce bien las muchas dificultades para acceder al territorio de forma legal y segura, ante la falta de vías no vinculadas necesariamente al mercado laboral.

Por otro lado, son pocas las opciones para regularizarse que no estén vinculadas al empleo, lo cual deja fuera a numerosas personas y familias en situación administrativa irregular en las principales normativas de extranjería.

Cáritas propone:

Revisar las condiciones de acceso regular al territorio para garantizar la igualdad de trato de todas las personas extranjeras, así como el acceso a una autorización de residencia y/o trabajo que contemple otros requisitos no vinculados necesariamente a contar con un contrato de trabajo.

7. Proteger de manera efectiva a las mujeres que sufren violencia machista, dotando de coherencia al ordenamiento jurídico.

La normativa estatal contempla un concepto restrictivo de violencia machista lo que limita su ámbito de aplicación y protección. A nivel autonómico, existe diversidad en relación con el concepto y el proceso de acreditación de la condición de víctima, lo que provoca diferencias en el acceso a derechos –vivienda, empleo...– en función del territorio, así como en lo que concierne principalmente a la adopción de medidas de protección y el acceso a prestaciones sociales.

Cáritas propone:

La modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con los siguientes objetivos:

- Ampliar el concepto de violencia de género, previsto en la Ley Orgánica 1/2004, a todas las formas de violencia machista y con ello adaptar la normativa española a los compromisos internacionales asumidos por España en su deber de actuar con debida diligencia para prevenir y erradicar todas las formas de violencia previstas en el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, así como en otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por España, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
- Unificar a nivel estatal los criterios y flexibilizar los procedimientos de acreditación de la condición de víctima y garantizar así el acceso efectivo a derechos (empleo, vivienda ...) de todas las mujeres que sufren violencia machista en cualquier ámbito de la vida, con independencia del territorio y de su situación administrativa (en el caso de las mujeres extranjeras y comunitarias).
- Desvincular la protección y el acceso a derechos de un proceso judicial.

8. Garantizar que las políticas de desarrollo contribuyan al fortalecimiento de la sociedad civil en terceros países.

El espacio cívico es el entorno que permite a las personas, organizaciones y comunidades participar de forma significativa en la vida social, cultural, económica y política de la sociedad. En la actualidad, está sometido a una alta presión en diversos países.

En los distintos estados se multiplican las leyes represivas que conllevan restricciones a la libertad de expresión, participación, reunión, asociación, entre otros derechos humanos. Estas vulneraciones, junto al aumento de las persecuciones a los líderes de comunidades y defensores de derechos humanos, debe interpelar a la actuación de la acción exterior española.

Cáritas propone:

El compromiso de incluir políticas y normas encaminadas a que la acción de la cooperación internacional al desarrollo contemple la priorización del fortalecimiento de los espacios cívicos, así como de la participación de la sociedad civil.

- Por consiguiente, Cáritas considera que el Estado español debe acometer políticas en las que se priorice el fortalecimiento de la sociedad civil en los distintos estados en los que haya presencia de la cooperación española, con el objetivo de contribuir a la construcción de la paz mediante el desarrollo de las comunidades y fortalecimiento de las instituciones locales.
- Estas políticas y medidas legislativas deben ir acompañadas de la asignación presupuestaria necesaria y del compromiso adquirido de alcanzar el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta destinada a la Ayuda Oficial al Desarrollo.

CARITASEN PROPOSAMENAK

2023KO HAUTESKUNDE OROKORREN AURREAN



CARITASEN PROPOSAMENAK

2023 HAUTESKUNDE

OROKORRETAN

AURKEZPENA

Politiken erdian, pertsonarik ahulenak

Hurrengo hauteskunde orokorrak direla eta, eta azken hauteskunde-deialdian egin duen bezala, eta legegaldian onartutako legedian emaitza oso positiboa izanik, Caritasek gizarte bidezkoagoa eta anaiagoa eraikitzen lagundu nahi du.

Agenda politikoaren erdian pertsona ahulenen errealitatea kokatuz, Caritasek legegintza- eta politika-proposamen publiko horiek aurkezten ditu, alderdi politikoekin batera aztertzeko eta alternatibak proposatzeko, lehenik hauteskunde-programetan sartzeko eta hurrengo legegintzaldian politika horiek garatzeko. Alderdi politikoen konpromisoa eskatzen dugu egoera ahulenean dauden pertsonak beren politiken erdian jar ditzaten.

Eta, horretarako, honako hau egiaztatu behar dugu: lehenik politikoak ezartzen direnean, gizarteak eta gobernatzeko eta legeak egiteko eskumena dutenek parte hartzen duten prozesu bat garatzen denean, gehien behar duten pertsonak ardatz nagusi dituzten politikak onartzen dira.

Duintasuna, giza eskubideak, ondasun komuna

Dokumentu hau funtsezko printzipio ebanjelikoetatik eta Elizaren doktrina sozialetik abiatzen da, hala nola: pertsonaren duintasuna, berez dagozkion eskubideak, botere publikoek uneoro eta tokian bermatu beharrekoak, eta politikak bideratu behar dituen ondasun komuna.

Egoeratik babesteko egitura-oinarriak

Ondoz ondoko krisi ekonomiko, sozial eta ingurumenekoek, pandemiak eragindakoek edo Ukrainako gerrak eragindakoek, etengabe adierazten dute egiturazko erreformen beharra, eskubideak

bermatzeko beharra., egoera desberdinei aurre egiteko gure gizarteak egiten duena ziurtatzea; izan ere, egoera horietan, oinarri sendorik ezartzen ez bada, egoera ahulenean dauden pertsonak dira gehien sufritzen dutenak, helburua babestuenak izatea denean.

Errealitate sozialean oinarritutako proposamenak

Proposamen horiek errealitate sozialetik abiatzen dira bi bidetatik. Alde batetik, bazterkeria egoeran dauden pertsonen zuzeneko partaidetzaren emaitza dira, Caritasen laguntza jasotzen dutenak, haientzat lehentasuna duten eskubideak adierazi baitituzte. Bestetik, Caritasek errealitatearen behatokiaren bidez egindako azterketa eta FOESSA fundazioaren txostenen egiaztapenak biltzen dituzte.

Bazterketa-egoeran dauden pertsonen lehenetsitako eskubideak

Hala, Caritasen bide-laguntza jasotzen duten 1.000 pertsona inguruk adierazitako lehentasunetan oinarritzen dira proposamenak. Horiek, lurralde osoan banatutako 95 hausnarketa-talderen bidez, bermatu beharreko eskubideak identifikatu dituzte gizartean erabat parte hartzeko.

Dimentsio unibertsala

Caritasek dimentsio unibertsala du, giza familia bakarra izateko deialdiaren eta Caritas nazionalekin eta bertako herrialdeetako errealitateekin duen konpromisoaren adierazgarri. Horregatik, hauteskunde-deialdi bakoitzean egiten ditugun proposamenetan, nazioarteko proposamen bat dago, nazioarteko lankidetzan izan behar dugun rola eta munduko leku guztietan giza eskubideak errespetatzea sustatuz.

Pertsona, familia eta gizarteari buruzko lan pastoralerako tresna¹: *“Krisiak (...) arrasto sakona uzten digu (...), desorekak eta gizarte-bazterkeria areagotzean gauzatzen dena, sektore ahulenetan gizarte-haustura sakondu eta kronikoa egiteko mehatxua egiten duena. Egoera horren aurrean, politika publikoetatik erantzuteko ahalegina aurreko krisialdian baino handiagoa izan da, abian diren politika publikoak indartu eta eraldatzeko prozesuarekin, eta, hala ere, ezin izan da beti gizarte-beharrek eskatzen zuten erritmoari jarraitu. Kasu batzuetan, behin-behineko neurriak hartu dira (osasunaren, etxebizitzaren edo gizarte-babesaren kasuan), eta neurri horiek etorkizunean egonkor mantendu beharko lirateke, aldaketa logikoekin”.*

Giza eskubideak bermatuko dituen lege-esparrua lortzea

Proposamen horien bidez, gizarte osoarentzako Giza Eskubideak bermatuko dituen lege-esparrua lortu nahi da. Horretarako, arreta berezia jarri nahi zaie eskubide horiek eskuratzeko eta gauzatzeko zailtasun handienak dituzten pertsoneri, pobrezia- eta bazterkeria-errealitateak direla eta, zaurgarritasun handiagoa eragiten duten jatorriari edo generoari, edo eskubideak eskuratzeko ekintza irmo bat behar duten tokiei. Alde horretatik, proposamen bakoitzaren lege-garapenean kontuan hartu behar da landa-eremuaren berezitasuna, testuinguru horretarako neurri egokiak hartuz.

Guztien ongiaren zerbitzura jarritako politikarik onena

Fratelli *Tutti* gutun entziklikoan Frantzisko aita santuak adierazten duenari jarraituz, «giza duintasun besterenezina izate hutsetik sortzen diren eskubideen printzipio handia onartzen bada, amesteko eta beste gizateria batean pentsatzeko erronka onar daiteke» (127 z.) eta, horretarako, gure gizartean, gure munduan «benetako ondasun komunaren zerbitzura jarritako politikarik onena behar da» (154 z.). Helburu horrekin lagundu nahi du Caritasek proposamen hauen bidez, karitate politikotik bere misioari erantzunez.

1. Giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen eraginkortasuna bermatzea.

Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren 25. artikulua pertsona orok behar duen euskarria jasotzen du, duintasunez bizi ahal izateko, bizi-maila egokia eskuratu, osasuna eta ongizatea gozatu eta bermatuta izateko honako hauekin ziurtatuko diona:

- Elikadura egokia eta jasangarria.
- Etxebizitza, energia, ura eta Internet.
- Jantzia.
- Laguntza medikoa.
- Gizarte zerbitzuak.
- Langabezia, eritasun, baliaezintasun, alarguntasun, zahartzaro eta bestelako kasuetan aseguruak, beren borondatez kanpoko inguruabarrak direla-eta bizibideak galtzen dituztenean.

Gutxieneko edukia izanik, estatuak nahitaez bete beharrekoa, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunean (gure Parlamentuak 1973ko apirilean berretsia) eta Europako Gutun Sozial Berrikusian (2021eko ekainean berretsia) garatu zen.

Gure legedian jasotako eskubideak giza eskubideen nazioarteko itunen arabera interpretatzea emaitzako betebeharra da, legegilea eta auzitegiak lotzen dituen. Interpretazio horrek ez ditu tratatuen eta protokoloen testua bakarrik hartzen, baita horiek gainbegiratzeko organoen erabakiak ere.

Caritasek hau proposatzen du:

Nazioarteko Itun eta Akordioei buruzko azaroaren 27ko 25/2014 Legea aldatzea eta Giza Eskubideen Nazioarteko Organoen Ebazpenen Jarraipen Batzordea sortzea, helburu hauekin:

- Giza eskubideen betebeharrak betetzea.
 - Gutxieneko betebeharrak, berehalakoak. Berehalako betebeharren artean daude bereizkeria debekatzea eta talde ahulak babestea.
 - Betebehar progresiboak, arrazoizko epean eta ahalik eta baliabide gehienekin bete beharrekoak.
- Espainiako Estatuak berretsitako giza eskubideen tratatuen organoen gomendioak eta irizpenak betearazteko lege eta politika publikoak hartzea.

2. Egoera ahulean dauden pertsona eta familien egoitza-bazterkeriari aurrea hartzea.

Etxe duin eta egoki batean bizi izatea da, gaur egun, gure estatuan bazterturik, desberdintasunik gabe eta pobrezian dauden pertsona eta familien kezkarik handiena (FOESSA 2022 txostena).

Etxebizitzaren galera prebenitzea eta gaur egun kalean, harrera-etxeetan, infraetxeetan edo etxebizitza ezseguruetan bizi diren milioika pertsonen artean sartzen hastea; funtsezko eta lehentasunezko helburua da etxebizitza egokia izateko giza eskubidean oinarritutako politika publikoak diseinatu eta gauzatzeko.

Caritasek hau proposatzen du:

Prozedura Zibilari buruzko Legea aldatzea, pertsona eta etxe ahulen babes handiagoa lortzeko, eta Nazio Batuen Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Batzordearen Irizpenak eta Gomendioak (DESC) aplikatuz. Helburu hauek ditu:

- Egoera hori bermatzen ez den bitartean, kaltetutako pertsonen kontentsazio bat edo etxebizitza alternatibo egoki bat izateko aukera izatea, etxetik atera gabe (PIDESCren 7. ohar orokorra betetzea).
- Arrazoikortasun- eta proportzionaltasun-printzipioak sartzea, baita eragindako pertsonentzako lege- eta prozesu-berme egokiak ere.

3. Zaintzen Plan Integrala sortzea, hartzaileak, haiek hornitzen dituztenak eta aukeratzeko askatasuna ematen duten prestazioak bermatuko dituena.

Europako Batzordeak Zaintzen Europako Estrategia eta Espainiako Gobernuak gizarte-ekonomiako eta zaintzako PERTEa onartzea lehen pausoa izan behar da anbizio handiko eta zeharkako Zaintzen Plan Integrala prestatzeko, eskubideak sustatzeko eta, aldi berean, gizarte-eredua aldatzeko.

Caritasek hau proposatzen du:

Zaintzen Plan Integrala garatzea, bizitzako etapa guztietan (haurrak, nerabeak eta gazteak, adinekoak, mendekotasuna duten pertsonak edo ezgaitasuna dutenak) zaintzak ematen laguntzeko araudia sortzeko; lana eta familia uztartzea; eta arreta berezia ematea pobrezia-egoeran edo arriskuan dauden pertsonen beharrezko laguntzak emateko. Era berean, zaintzen hornitzaileen lan eskubideak bermatu eta indartu behar dira.

Plan hori honako hauen bidez sortzea: elkarriketaren eta parte-hartzearen bidez, langilearen edo prestakuntzaldian dagoen pertsonaren familia eta lana bateragarri egiteko neurrien bidez; pertsonak eta familiak eragindako kolektiboen autonomian eta parte-hartzean askatasunez erabakitzeko aukera ematen duten gizarte-prestazioak; eta pertsonen eskubideak sustatzera bideratutako zerbitzu kolektiboak emateko ereduak eraldatzearen bidez, betiere, familia-nukleoaren barruko erantzunkidetasunak lehentasuna duen berdintasun-ikuspegi batekin.

4. Administrazio ona izateko eskubidea bermatzea, administratuek harekin harremanak izateko modua aukeratzeko duten eskubidea onartuz, baita baliabide elektronikoen bidez ere, izapideak sinplifikatuz eta prozedurak arinduz.

Espainiako Konstituzioaren 103. eta 106. artikuluetan eta Oinarrizko Eskubideen Europako Gutunaren 41. artikuluan jasotzen den Administrazio Onerako eskubideak administrazio publikoen eta administrazio-prozeduraren jarduerari dagokionez jartzen ditu administratuak eta haien eskubideak erdialdean.

Horrek esan nahi du administrazio publikoek, maila guztietan (tokikoa, autonomikoa eta estatukoa), administratu guztien eskubidea bermatu behar dutela, beren eskubideak eta betebeharrak gauzatzeko baliabide elektronikoen bidez komunikatzen diren ala ez aukeratzeko.

Caritasek hau proposatzen du:

Behar adina sarbide publiko sortzea, laguntza-langileez hornituak eta lurralde osoan presentzia dutenak, landa-eremuetan barne, hala nahi duten pertsonak egin ahal izan dezaten eta aurrez aurre lagun diezaietela, dagokien izapideetan eta lege-erreserba ez duten izapideetan.

- Harreman hori, presentziala nahiz elektronikoa, berdintasun-, partaidetza- eta gardentasun-baldintzetan egingo dela bermatzea, horretarako behar diren baliabide materialak eta giza baliabideak emanaz.
- Tramitazio elektronikoak, erregelamendu bidez proposatzen denean, ahalmen ekonomiko eta teknikoagatik edo behar diren baliabide elektronikoetarako eskuragarritasunik ez dutela frogatzen duten beste arrazoi batzuegatik zaugarriak diren herritarrak salbuestea.

5. Enplegu-politika publiko erresilienteak eta inklusiboak garatzea, langileen eskubideak bermatzeko eta, aldi berean, lan-merkatu dinamiko batera egokitzeko.

Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planak gure Estatua konprometitzen du Europar Batasunaren aurrean enpleguko politika publikoak aldatu eta egokitzera, erronka eta helburu gisa enplegu sistema modernizatzea finkatuz.

Bestalde, lan-eskubideei dagokienez, eta errebindikazio historikoaren xede izanik, 16/2022 Errege Lege Dekretua onartzeak aurrerapauso bat ekarri du etxeko langileen eta erregimen orokorraren barruan dauden zerbitzuak ematen dituzten gainerako pertsonen eskubideak parekatzeko. Hala ere, konpondu gabeko alderdiak daude, eta desberdintasun batzuk dituzte, eta, ondorioz, ez da benetako berdinketa osoa gertatu.

Caritasek hau proposatzen du:

1. Enplegu politiken jardunak gure lan-merkatuaren gabeziak argitzea eta gizarte-errealitate berrietara egokitzea, enplegu duina lortzeko aukera zailagoak dituzten pertsona-kolektiboetan arreta jarritz. Enplegu-politika batzuen planifikazioa eta koordinazioa beharrezkoak dira, besteak beste, hauek bermatzeko:

- Enplegarritasun egokia, langilearen egoera pertsonal eta familiarra kontuan hartuko duena, bitartekaritza eta lana lortzeko, eta bateragarritasuna erraztuko duena.
- Zerbitzu-zorrorako sarbide osoa eta egokia izatea, baliabide eta/edo ezagutza digitalik ez duten pertsonak kanporatu gabe.
- Gizarte eta hezkuntza arloko ekintzak dituzten prestakuntza programak, lehentasunezko taldeetako kideak xede dituztenak.
- Landaguneetako herrietan lan merkatuak garatzeko neurriak, jende gutxi bizi denean edo jendea despulatuzko arriskua dagoenean, langileak deslokalizatzea saihestuz.
- Lehentasunezko arreta behar duten talde urratuekiko gizarte esku-hartzean espezializatuta dauden hirugarren sektoreko entitateekin hitz egitea, enplegu politiken giltzarri gisa aintzatespena bermatuz.

2. Behar diren lege aldaketak egitea, etxeko langileek laneko eta gizarte segurantzako eskubideak erabat parekatu ditzaten.

- Legezko neurri egokiak ezartzea, etxeko langileen eta zaintzako langileen artean berezko ezaugarri eta bereizgarriak kontuan hartuko dituzten lan-baldintza guztiz zintzoak bermatzeko, haien eskubideak bermatuz. Era berean, ezintasun iraunkorragatiko edo erretiroagatiko estalduraren eta kotizatutako epeen arteko parekatze osoa ere gertatu behar da.
- Enplegu-emaileentzako hobariei eustea.

6. Migrazio-politikak eta atzerriartasunari buruzko arauak aukerak kontuan hartzen dituzten bideak sustatu behar dituzte, lan-merkatutik haratago.

Caritas jatorrian, joan-etorrian eta helmugan daude pertsona behartuei ematen die bide-laguntza. Ondo ezagutzen ditu lurraldera modu legalean eta seguruan iristeko zailtasunak, lan-merkatuari nahitaez lotu gabeko biderik ez dagoelako.

Bestalde, aukera gutxi daude enpleguarekin loturarik ez dutenak arautzeko, eta horrek atzerriartasunari buruzko araudi nagusietan egoera administratibo irregularrean dauden pertsona eta familia asko kanpoan uzten ditu.

Caritasek hau proposatzen du:

Lurraldean sartzeko baldintza erregularrak berrikustea, atzeritar guztien tratu-berdintasuna bermatzeko, eta egoitza-baimena eta/edo lan-kontratua izatearekin nahitaez lotuta ez dauden beste baldintza batzuk jasotzen dituen lan-baimena eskuratzeko.

7. Indarkeria matxista pairatzen duten emakumeak eraginkortasunez babestea, antolamendu juridikoari koherentzia emanez.

Estatuko araudian indarkeria matxistaren kontzeptu murriztailea jasotzen da, eta horrek mugatu egiten du haren aplikazio eta babes eremua. Autonomia-mailan, biktima izaera egiaztatzeko prozesuari eta kontzeptuari dagokienez, aniztasuna dago, eta horrek desberdintasunak eragiten ditu eskubideak eskuratzeari dagokionez —etxebizitza, enplegua...— lurraldearen arabera, bai eta babes-neurriak hartzeari eta gizarte-prestazioak eskuratzeari dagokionez ere.

Caritasek hau proposatzen du:

Genero Indarkeriaren aurkako Babes Osoko Neurriei buruzko 1/2004 Lege Organikoa aldatzea, helburu hauekin:

- 1/2004 Lege Organikoa aurreikusitako genero-indarkeriaren kontzeptua indarkeria matxistaren mota guztietara zabaltzea, eta, hala, Espainiako araudia Espainiak bere gain hartutako nazioarteko konpromisoetara egokitzea, Emakumeen aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitu eta borrokatzeko Europako Kontseiluaren Hitzarmenean aurreikusitako indarkeria-mota guztiak prebenitzeko eta desagerrarazteko, bai eta Espainiak giza eskubideen inguruan berretsitako beste hitzarmen eta tresna batzuk ere.
- Estatu mailan, biktima-izaera egiaztatzeko irizpideak bateratzea eta prozedurak malgutzea, eta, hala, bizitzaren edozein esparrutan indarkeria matxista jasaten duten emakume guztien eskubideak (enplegua, etxebizitza...) benetan eskuratzeko aukera bermatzea, lurraldea eta egoera administratiboa edozein izanda ere (emakume atzerritarren eta emakume komunitarioak).
- Babesa eta eskubideak prozesu judicial batetik bereiztea.

8. Garapen-politikek hirugarren herrialdeetan gizarte zibila indartzen lagunduko dutela bermatzea.

Eremu zibikoak aukera ematen die pertsoneri, erakundeei eta komunitateei gizarteko bizitza sozial, kultural, ekonomiko eta politikoa modu esanguratsuan parte hartzeko. Gaur egun, presio handia jasaten ari da hainbat herrialdeetan.

Estatu desberdinetan, lege errepresiboak ugaritu egiten dira, adierazpen-askatasuna, parte-hartzea, bilera, elkartzea eta beste giza eskubide batzuk murrizten baitituzte. Urraketa horiek, erkidegoetako liderren eta giza eskubideen defendatzaileen jazarpenak areagotzearekin batera, Espainiako kanpo-ekintzaren jardunari egin behar dio interpelazioa.

Caritasek hau proposatzen du:

Garapenerako nazioarteko lankidetzaren ekintzak gizalegezko espazioak sendotzeko eta gizarte zibilaren partaidetzari lehentasuna emateko politikak eta arauak sartzeko konpromisoa.

- Beraz, Caritasen ustez, Espainiako Estatuak gizarte zibila sendotzeko lehentasuna emango dioten politikei ekin behar die, Espainiako lankidetzaren dagoen estatuetan, bakea eraikitzen laguntzeko, komunitateak garatuz eta tokiko erakundeak indartuz.
- Politika eta lege-neurri horiekin batera, beharrezko aurrekontu-esleipena eta Garapenerako Laguntza Ofizialerako Errenta Nazional Gordinaren % 0,7 lortzeko hartutako konpromisoa aurkeztu behar dira.

